

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (Reparto)

E. S. D.

Ref.: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

DEMANDANTE: JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS– CC # 94.191.440 DE EL DOVIO (VALLE).

DEMANDADO: LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. – GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

DIANA MARIA RAMIREZ TREJOS, vecina de Tuluá (V.), identificada con cédula de ciudadanía **N° 66.729.570** de Tuluá, abogada con tarjeta profesional **N° 145.522** del C.S.J., obrando en mi calidad de apoderada especial del señor **JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 94.191.440** expedida en El Dovio (Valle), por medio del presente escrito, conforme al poder que adjunto, respetuosamente me permito impetrar ante su despacho Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de conformidad con el Artículo 138 del CPACA, contra **LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUPREVISORA S.A.**, representada legalmente por el Director de prestaciones económicas el señor JOVANI ORLANDO BERNAL ULLOA, o quien haga sus veces al momento de la notificación de esta demanda, - **GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA** representada legalmente por la señora Gobernadora del Departamento DILIAN FRANCISCA TORO, o quien haga sus veces al momento de la notificación de esta demanda y **SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**, esta última, representada legalmente por el Secretario de Educación Departamental del Valle del Cauca el señor EDILMER DE JESUS GUTIERREZ SERNA, o quien haga sus veces al momento de la notificación de esta demanda, para que mediante el trámite legal correspondiente y a través de sentencia me sean concedidas las pretensiones de esta demanda conforme a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, creo el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO como una cuenta especial de la nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, a la cual le corresponde el pago de la cesantía de los docentes pertenecientes a los establecimientos educativos del sector oficial.

SEGUNDO: Que mí poderdante, el Señor JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS, al laborar como docente en los servicios educativos estatales, Solicitó un anticipo de cesantías, para lo cual radicó documentos el día 19 de agosto de 2015, bajo el número: 2015-PQR-3774.

Dirección: Carrera 34 No. 42– 49. – B/ Nuevo Fátima (Tuluá)
E-mail: dianamramirez17@hotmail.com / Teléfono: 318-6311166 / 317-6473150

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

TERCERO: Que la Resolución 01597 del 02 de junio de 2016, reconoce a mi poderdante en su artículo primero del resuelve la suma de \$15.096.020 m/cte.

CUARTO: Que en nombre de mí representado el docente JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS, me notificó de la Resolución 01597 del 02 de junio de 2016 el día 09 de junio de 2016.

QUINTO: Que el día 26 de agosto de 2016; La FIDUPREVISORA S.A., hace el desembolsó al Banco BBVA (sucursal Tuluá-Valle) del dinero aprobado en la Resolución 01597 del 02 de junio de 2016.

SEXTO: Que de conformidad con la Ley 244 de 1995 , Ley 1071 de 2006 y demás normas concordantes, LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. – GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, cuentan con sesenta y cinco días (65) hábiles después de la radicación de la solicitud de la cesantía parcial y/o definitiva, para hacer efectivo el pago de la misma, de no ser así, incurrirá en una SANCION MORATORIA equivalente a UN (1) DÍA DE SALARIO POR CADA DÍA DE MORA.

SÉPTIMO: Que de acuerdo a los numerales anteriores de los “hechos”, LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA., incurrió en una mora que amerita una SANCION MORATORIA a favor de mi poderdante, por haber cancelado fuera de los términos de Ley, las cesantías definitivas.

OCTAVO: Que mediante Derecho de Petición dirigido por mí, en representación de mi mandante JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS al entonces Secretario de Educación Departamental del Valle del Cauca, el Doctor MARIO GERMAN FERNANDEZ DE SOTO, radicado el 06 de septiembre de 2016, con numero consecutivo 64738, se inició el agotamiento de la vía gubernativa, solicitando el reconocimiento de una SANCION MORATORIA en virtud a que se presentó una mora en el pago de las cesantías parciales de mi representada, donde se vulneraron sus derechos claramente definidos en la Ley 1071 de 2006 en sus Artículos 4° y 5°.

NOVENO: Que al día 07 de diciembre de 2016; la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, NO había emitido respuesta alguna al derecho de petición radicado el 06 de septiembre de 2016, con numero consecutivo 64738.

DÉCIMO: Que se entiende por agotada la vía gubernativa, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011; configurándose un acto ficto o presunto por silencio administrativo negativo.

UNDÉCIMO: Que el día 29 de diciembre de 2016; se solicita ante la procuraduría delegada para asuntos administrativos de Cali, fijar fecha para AUDIENCIA DE

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

CONCILIACION a efectos de agotar el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, reglamentado por el Decreto 1716 de 2009 en procura de un acuerdo entre las partes.

DÉCIMO SEGUNDO: En cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1285 de 2009, y el artículo 161 del CPACA, en el sentido de que la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho constituye un prerrequisito de procedibilidad para la instauración de la demanda, adjunto a la presente, original del documento de la constancia de tramite conciliatorio fechada el día 24 de febrero de 2017; ante la Procuraduría 60 judicial I para asuntos administrativos de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Firmada por el Dr. Diego Felipe Vivas Tobar – Procurador 60 judicial I para asuntos administrativos.

Previos los trámites del proceso ordinario, solicito se hagan las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: Sírvase señor Juez en consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado en virtud del Silencio Negativo de los demandados LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. – GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA., frente al Derecho de Petición radicado el radicado el 06 de septiembre de 2016, con numero consecutivo 64738, ante la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, solicitando el reconocimiento y pago de una SANCION MORATORIA para mi representada.

SEGUNDA: Sírvase señor Juez en consecuencia, declarar que el demandante, JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS, tiene derecho al reconocimiento y pago de una SANCION MORATORIA.

TERCERA: Sírvase señor Juez en consecuencia, condenar a LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, a que se le reconozca y pague a mi poderdante JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS la SANCION MORATORIA, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de mora, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante las Entidades demandadas y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma, tal y como lo manda la Ley 1071 de 2006 en sus Artículos 4° y 5°. La SANCION MORATORIA correspondiente es equivalente 275 días, desde el día, 24 de noviembre de 2015; Fecha marcada como el día número 66 después de radicada la solicitud de cesantías, hasta el día 25 de agosto de 2016; un día antes de la fecha en la cual la FIDUPREVISORA S.A., desembolsa el monto aprobado en la resolución a la entidad bancaria.

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

CUARTA: Sírvase señor Juez, condenar a los demandados LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, a pagar los intereses moratorios o la indexación correspondiente en las condenas en las que resulte viable, de acuerdo a la normatividad, hasta el momento en que se efectuó el pago.

QUINTA: Que se dé cumplimiento a la sentencia bajo los parámetros establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTA: Sírvase señor Juez, condenar a las Entidades demandadas LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA a pagar las costas y agencias en derecho del presente proceso si es que a ellas hay lugar.

NORMAS VIOLADAS

Se transcriben como normas violadas las siguientes:

- Artículos 6, 53 y 209 Constitución Política de Colombia
- Artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989.
- Artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995.
- Artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Artículo 6 C.P.- Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 53. C.P. - El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Artículo 209. C.P. - La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

La Actuación administrativa de las Entidades demandadas ha desconocido preceptos constitucionales que amparan el derecho al trabajo y sus derechos laborales, como el pago oportuno de las cesantías; el reconocimiento de las cesantías y de la mora es consustancial al estado social de derecho.

El pago tardío de las cesantías ocasiona que el trabajador deba soportar injustificadamente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

El pago oportuno de las cesantías, salarios y demás emolumentos, deriva directamente de la Constitución Política, sin necesidad de requerimiento judicial.

Según la Corte Constitucional, el artículo 53 de la C.P. debe ser interpretado de forma amplia que protege el pago oportuno de toda remuneración salarial o prestacional a continuación transcribo apartes de la Sentencia T260 de 1994:

“II. La protección constitucional a la remuneración incluye protección a la cesantía (Convenio 95 de 1949 de la OIT).

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de la cesantía. Hay quienes la consideran como una forma de salario. No es ese el criterio del Código Laboral porque allí expresamente se dice que las prestaciones sociales no constituyen salario (art. 128). Sin embargo, la O.I.T., en su Trigésima Segunda Reunión, efectuada en Ginebra en 1949, al expedir el CONVENIO N° 95 relativo a la PROTECCION AL SALARIO aprobado mediante Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición toda forma de remuneración.

"Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio, el término 'salario', significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".[1]

Esta amplia definición que sobrepasa lo que en Colombia se entiende como salario, permitió que en el artículo 12 del mismo Convenio se dijera:

"Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato". (Subraya fuera de texto)."

“Es lógico que esta parte del artículo 12 del Convenio N°95 se refiere no solo a las mensualidades debidas sino también a cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación laboral. Se hace esta afirmación porque no de otra manera se puede interpretar la frase TODOS LOS SALARIOS, la cual fue introducida en el texto a petición de los trabajadores; porque para el caso específico del salario mensual se indicó que el pago debería efectuarse por lo menos dos veces al mes, o, excepcionalmente una vez al mes (Capítulo III, Parte III de las Recomendaciones, "Periodicidad para el pago de los salarios") y no en "término razonable" y porque en Reclamaciones que ha habido por incumplimiento del Convenio se han relacionado como faltas al pago de "salario" las demoras relacionadas con remuneraciones derivadas de la finalización del trabajo[2]. Se hacen las anteriores advertencias para que se entienda porqué prestaciones sociales como por ejemplo la cesantía están cobijadas por los principios constitucionales de la protección a la remuneración (art. 53 C.P.), así haya diferencia normativa entre salario y prestación en nuestra legislación.”

“Por supuesto que la razonabilidad se aprecia en cada caso concreto, según la simpleza o complejidad del mismo, respetando por un lado la teoría de la AUTOTUTELA, y teniendo en cuenta por el otro aspecto que un retardo injustificado atenta contra la caracterización del Estado Colombiano (Art. 1º C.P.), viola el principio de que las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (art. 2º C.P.), y uno de tales deberes es pagar las obligaciones laborales para lo cual las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones (art. 209 C.P.) porque los servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad (art. 123 C.P.), de lo cual se infiere que la administración no es un fin en sí misma sino un medio para garantizar la efectividad de los derechos.

La negligencia, las fallas, la ineptitud, la ineficacia no son argumentos válidos para disculpar un retardo en el decreto y liquidación de una prestación social. Mucho menos se justifica la demora cuando en casos similares sí se actúa con prontitud. El Juez de Tutela tiene la responsabilidad de realizar la justicia material sí, en su criterio, el trabajador queda indefenso. Hay motivo para creer que hay indefensión si la administración va más allá del margen temporal razonable de cumplimiento.

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Con mayor razón si se ha ejercido por el trabajador el derecho de petición y éste no ha sido resuelto. La Corte Constitucional ha sido enfática a este respecto.”

- Artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989.
- Artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995.
- Artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Ley 91 de 1989, Artículos 5 y 15, dicen:

Artículo 5º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:

- 1.- Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.*
- 2.- Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.*
- 3.- Llevar los registro contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.*
- 4.- Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.*
- 5.- Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.*

NOTA: Según el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social, contenido en la Ley 100, no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros de las Comisiones Públicas, ni los afiliados al fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.

Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

...3.- Cesantías:

- A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.*

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. Radicación 530 de 1993 Sala de Consulta y Servicio Civil...

Se debe tener presente que el pago de las cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM, por tener la calidad de servidores públicos y por analogía les será aplicable la Ley 244 de 2005 y 1071 de 2006, estableciendo términos perentorios para el reconocimiento de dicha prestación, estableciendo que dentro de los 15 días hábiles a la radicación de la solicitud se debe expedir la resolución de reconocimiento y que dentro de los 45 días luego de puesto en firme el acto administrativo de reconocimiento se debe proceder con el pago.

Ley 244 de 2005, artículos 1º y 2º, dicen:

Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitencionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

Ley 1071 de 2006, artículos 4º y 5º, dicen:

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Artículo 4° *Términos.* Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo”.

Artículo 5° *Mora en el pago.* La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Debo también citar El Artículo 2° de la Ley 91 de 1989 que en su numeral 5 dice:

Artículo 2°.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieron sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

Mediante la Sentencia de unificación de la sala plena del Consejo de estado No. 2777-2007 del 27 de marzo de 2007, con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante; Expediente 2000-2513, respecto de la solicitud de la moratoria en vía gubernativa, afirmó:

“Dicho de otro modo, como el perjuicio por reparar se origina en una decisión o manifestación unilateral de voluntad de la administración destinada a producir efectos jurídicos es necesario invalidarla, previo agotamiento de la vía gubernativa, para poder obtener el restablecimiento respectivo y como la ley no prevé que mediante las acciones de reparación directa o de grupo puedan anularse los actos administrativos, estas no son la vía procesal adecuada.

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Desconocería la integridad del ordenamiento jurídico percibir una indemnización por un perjuicio originado en un acto administrativo sin obtener antes la anulación del mismo porque este continuaría produciendo efectos jurídicos ya que ese es su cometido legal.

(...)Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho.”

La misma Sentencia de unificación de la sala plena del Consejo de estado, más adelante precisa claramente que el término con el cual cuenta la administración para realizar el pago efectivo del auxilio de cesantía es de 65 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de su reconocimiento.

Mediante Fallo de sentencia 1872 del 08 de abril de 2008 del Honorable Consejo de estado del Consejero ponente Dr. Gerardo arenas Monsalve - Radicación número: 73001-23-31-000-2004-01302-02 (1872-07), la cual se refiera a la naturaleza de la sanción moratoria, inicia dejando claro que:

...“La indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley. El espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, estableció el procedimiento para su reconocimiento y pago, consagrando, entre otros asuntos, una sanción a cargo de la Administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, en caso de constituirse retardo en el pago definitivo de la referida prestación”.

Acerca de la Liquidación la sentencia 1872/07, dice: “La sanción moratoria se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (art. 62 del C.C.A.).En los eventos en que la administración no se pronuncie o se pronuncie tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, dicha situación, salvo los casos previstos por la ley para su retención, no la exime de la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retraso”.

Ya en las “consideraciones”, en su punto 2 referente al marco jurídico, esta misma sentencia luego de citar los artículos 1° y 2° de L a Ley 244 de 1995 dice: “Como se observa, la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley... El espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, estableció el procedimiento para su reconocimiento y pago, consagrando, entre otros asuntos, una sanción a cargo de la Administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, en caso de constituirse retardo en el pago definitivo de la referida prestación... El espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, estableció el procedimiento para su reconocimiento y pago, consagrando, entre otros asuntos, una sanción a cargo de la Administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, en caso de constituirse retardo en el pago definitivo de la referida prestación... La sanción moratoria se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (art. 62 del C.C.A.).

Para terminar concluyendo en sus "consideraciones", que:

En los eventos en que la administración no se pronuncie o se pronuncie tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, dicha situación, salvo los casos previstos por la ley para su retención, no la exime de la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retraso. En este sentido se ha pronunciado la Sección Segunda de esta Corporación estableciendo el momento a partir del cual se configura la sanción moratoria:

"La Sala ha venido expresando que para lograr la efectividad de la previsión normativa contemplada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 el momento a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas en los eventos en que no exista acto de reconocimiento debe contabilizarse en la siguiente forma:

Se toma la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con los anexos que corresponda. Desde esa fecha deben computarse, conforme a los términos a los que alude la Ley 244 de 1995, quince (15) días hábiles para "expedir la Resolución correspondiente" de liquidación de las cesantías definitivas, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha en la cual haya quedado en firme dicha resolución, para efectuar el pago de la prestación social. Esto implica que deben contabilizarse en total sesenta (60) días hábiles a partir de la petición, más el término de ejecutoria de la resolución correspondiente, que ordinariamente corresponde a cinco (5) días hábiles, para un gran total de sesenta y cinco (65) días hábiles.

En conclusión, cuando la entidad no se pronuncie frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, el término para el cálculo de la indemnización moratoria comenzará a computarse a partir del día siguiente a los sesenta y cinco (65) días hábiles posteriores a la radicación de la petición de cesantías definitivas que obviamente debe ser posterior al retiro".

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Mediante Fallo de sentencia del 28 de abril de 2011, del Honorable Consejo de estado – sala de lo contencioso administrativo, del Consejero ponente Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez- Radicación número: 08001-23-31-000-2005-03525-01 - Expediente No. 1581-2008, realizo un análisis a las hipótesis indicadas en la sentencia de unificación y preciso:

"(...) 5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas.

(...)

Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, así:

5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías.

5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. 5.3.3. La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías.

En este caso pueden ocurrir varias posibilidades:

5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga.

5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente.

5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga.

5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente.

5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.

En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral.

En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2

(...)

En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo. (...)

Más adelante, este mismo fallo de sentencia del 28 de abril de 2011, anota: "Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho. (...)"
(Se resalta)

Se termina de citar esta sentencia, con el aparte que menciona: "...Con esta acción, tal como lo ha sostenido la Jurisprudencia, se busca la protección de un interés particular, con la finalidad de obtener el resarcimiento de un perjuicio causado con el acto cuya nulidad se pretende, es decir, que se encuentra legitimado para instaurar esta acción toda persona a quien se le vulnere un derecho protegido por el ordenamiento jurídico a través de un acto administrativo que afecte un derecho en particular.

La misma corporación, el 30 de julio de 2009, con ponencia del Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, dentro del expediente radicado 73012331000200100006-01 reiteró:

"...El momento a partir del cual se cuenta el plazo legal referido en las normas transcritas es el de la fecha de solicitud de reconocimiento por parte del interesado, tal como lo ha establecido esa corporación en reiteradas oportunidades:

Conforme al artículo 1 de la ley 244 de 1995 la entidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de Cesantías Definitivas, están obligadas a expedir la respectiva resolución y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la misma ley tiene un plazo de máximo de 45 días a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo para cancelar la prestación. En este caso el demandante solicita que se declare el silencio administrativo negativo frente a su petición el 9 de marzo de 1999 es decir que esta es la fecha que puede tomarse para efecto de contabilizar la aplicación de los artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995(...).

Así, el término con el que cuenta la administración para efectuar el pago efectivo del auxilio de cesantías es de sesenta y cinco (65) días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud de su reconocimiento. Este término comprende quince (15) días hábiles para expedir la Resolución de Liquidación de las Cesantías, cinco (5) días hábiles de su ejecutoria y cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago de la prestación social....."

Iguales criterios fueron plasmados por la máxima autoridad de la Justicia Administrativa en las siguientes providencias: Diciembre 7 de 2000 Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección segunda- Subsección A, Consejero Ponente Dr. Alberto Arango Mantilla- actor José Ever Rodríguez Barrero-Rad 2020-00; y Diciembre 12 de 2002 Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección segunda-Subsección B, Consejero Ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante, actor – Beatriz Cuberos de Coronel –Rad 1604-01.

Lo anterior muestra, entonces, que los jueces en los casos concretos analizados anteriormente, han encontrado procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la mora en la cancelación de los anticipos de cesantías por parte de las Entidades encargadas de dicho reconocimiento, que para el caso específico de mi representado el docente JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS, con los hechos

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

y pruebas aportadas con la demanda, se asemejan, ya que se cuenta con los datos y pruebas igual de contundentes a los casos expuestos.

Es la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, la vía adecuada para reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, toda vez, que se elevó petición ante LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. – GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA; sin que se haya dado respuesta a la misma dentro de los términos de Ley, lo que configuro un acto ficto o presunto que niega lo pretendido.

En este sentido, corresponde a las autoridades de vigilancia y control y al juez de la causa, exigir la aplicación material de las normas que amparan el caso puntual y evitar la burla de los derechos derivados de la misma. En otras palabras, las autoridades competentes evitarán la desviación inconstitucional de las normas protectoras de los derechos de mi representada y exigirán la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de las Leyes ya mencionadas.

En conclusión, se puede establecer claramente que en el caso de la docente GILMAR COBO PIEDRAHITA, se presentó una mora evidenciable en el pago de las cesantías por parte de LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

ACTO ACUSADO OBJETO DE LA ACCIÓN

El acto administrativo Ficto o Presunto que se constituyó por la omisión de LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUPREVISORA S.A. - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA; al no contestar la Petición radicada el 06 de septiembre de 2016, desconociendo así el Derecho al reconocimiento, liquidación y pago de la SANCION MORATORIA.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

AGOTAMIENTO DE VÍA GUBERNATIVA

De conformidad con el artículo 74 del CPACA en el presente caso no es obligatorio interponer el recurso de reposición y no procede el recurso de apelación por tratarse de una decisión del representante legal de una entidad descentralizada, entendiéndose agotada la vía gubernativa y permitiéndose acceder a la Jurisdicción de manera directa. Se anexa como prueba procesal el oficio (petición) con el cual se inició el agotamiento de la vía gubernativa.

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRA JUDICIAL EN DERECHO

De acuerdo a lo ordenado por la Ley 1258 de Enero 22 de 2009 y el artículo 161 del CPACA, que establece como requisito de procedibilidad la realización de audiencia de conciliación extrajudicial en derecho para el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, se anexa como prueba la constancia correspondiente emitida por el Dr. Jairo Restrepo Cáceres – Procurador 20 judicial II para asuntos administrativos de Cali.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Instauro la acción atendiendo que, al haberse configurado el acto ficto o presunto derivado por el Silencio Administrativo Negativo, es posible presentarla en cualquier momento.

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO

Los derechos laborales están sujetos a prescripción, por tanto, si no se hacen efectivos dentro de la oportunidad legal, se pierden, no obstante, esa prescripción se puede interrumpir dando más tiempo al trabajador para hacer efectivos sus derechos. La prescripción de los derechos laborales sucede según el artículo 488 del código sustantivo del trabajo, a los tres (3) años contados desde la fecha en que los derechos en cuestión se hicieron exigibles.

Al respecto dice el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo:

“Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.”

Aporto con la demanda la reclamación correspondiente, presentada como derecho de petición y que no fue resuelta por las entidades demandadas, configurando un acto ficto o presunto por silencio administrativo negativo.

COMPETENCIA

Por la naturaleza del acto impugnado, el domicilio de la parte demandada y la cuantía, que no supera los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales conforme al Artículo 155, 156 y 157 es usted competente señor Juez Administrativo.

De igual forma, y en aras de aclarar la competencia jurisdiccional, cito:

La Sentencia de unificación del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, radicación No. 110010102000201601798-00 del 16 de febrero de 2017, con ponencia del

Dirección: Carrera 34 No. 42- 49. – B/ Nuevo Fátima (Tuluá)
E-mail: dianamramirez17@hotmail.com / Teléfono: 318-6311166 / 317-6473150

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Honorable Magistrado, Doctor JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO; Aprobado según Acta No.14, de la misma fecha, respecto conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO, y la Jurisdicción Ordinaria representada por el JUZGADO VEINTIDOS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, con ocasión del conocimiento de la demanda de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, instaurada mediante apoderado por la señora INES ALICIA TABORDA PARRA, contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, afirmó:

“...si el accionante presenta una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declare que la administración ha incurrido en mora y por lo tanto está obligada a pagar intereses, será la competente la jurisdicción administrativa.

Lo que significa que el conocimiento de la demanda contra ese acto que reconoció el pago de sanción moratoria corresponde a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de acuerdo a las competencias señaladas por la ley 1437 de 2011, como lo indica reiteradamente la jurisprudencia de la máxima autoridad en materia contenciosa administrativa, pues, la pretensión se dirige a la anulación de un acto administrativo, que denegó el pago de la sanción moratoria porque las cesantías se pagaron de manera tardía.

Así las cosas, no puede la jurisdicción ordinaria laboral, asumir conocimiento de un asunto que no le corresponde dirimir, ya que la competencia en términos constitucionales y legales, es el conjunto de atribuciones y funciones conferidas a los órganos administrativos y judiciales, pues dada su multiplicidad es necesario delimitarles funciones bien sea por naturaleza de asunto, la cuantía de lo que se reclama, la calidad de las partes y en general todas aquellas situaciones descritas en la ley le define o distribuye determinados asuntos.”

Para terminar concluyendo esta sentencia en sus “consideraciones”, que:

“Así las cosas, en aras de favorecer la majestad de la justicia, en vista de obtener una celeridad en la protección de los derechos del trabajador, evitar que exista un doble proceso el cual causaría una dilación en el pago de los intereses moratorios, la vía indicada, consecuente con lo que persigue el actor, es la Jurisdicción Administrativa...”

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Sobre la estimación razonada de la cuantía establece el Artículo 157 del CPACA que esta se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Para el presente caso, teniendo en cuenta la totalidad de la sanción moratoria adeudada a la demandante, estimo en su totalidad, que ascienden a la suma de: **Diecinueve millones ciento cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos (\$19.146.248,00)** Moneda Legal Colombiana; dejando claro, que este monto no cuenta aún con los ajustes por indexación.

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

El nivel de detalle de estos montos, es:

Docente JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS - Cedula de ciudadanía No. 94.191.440 expedida en El Dovio (Valle).	
FECHA DE RADICACION DE LA SOLICITUD DE LA CESANTIA PARCIAL	19 de agosto de 2015.
FECHA EN LA CUAL SE EXPIDE LA RESOLUCION # 01597	02 de junio de 2016.
FECHA EN LA CUAL SE REALIZA LA NOTIFICACION PERSONAL	09 de junio de 2016.
FECHA EN LA CUAL LA FIDUPREVISORA DESEMBOLSA AL BANCO AGRARIO EL MONTO APROBADO DE CESANTIA PARCIAL	02 de septiembre de 2016.
FECHA MAXIMA PARA DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA LEY 1071 DE 2006 ARTICULO 4 Y 5 (65 días hábiles)	23 de noviembre de 2015.
DIAS RECLAMADOS POR SANCION MORATORIA (Desde el día 24 de noviembre de 2015 hasta un día antes de efectuarse el desembolso, agosto 25 de 2016)	275 días
SALARIO AÑO 2015, (calculados también los demás factores salariales en su doceava parte. Ver comprobantes de pago)	\$2´000.663 salario básico más la doceava parte de los demás factores salariales.
SALARIO AÑO 2016, (calculados también los demás factores salariales en su doceava parte. Ver certificado adjunto)	\$2´130.954 salario básico más la doceava parte de los demás factores salariales.

MES Y AÑO	DIAS EN MORA	VALOR DIA	VALOR MORA DEL MES
NOVIEMBRE 2015	7	\$64.731,80	\$453.112
DICIEMBRE 2015	31	\$66.668,76	\$2´000.663
ENERO 2016	31	\$71.031,79	\$2´130.954
FEBRERO 2016	29	\$71.031,79	\$2´130.954
MARZO 2016	31	\$71.031,79	\$2´130.954
ABRIL 2016	30	\$71.031,79	\$2´130.954
MAYO 2016	31	\$71.031,79	\$2´130.954
JUNIO 2016	30	\$71.031,79	\$2´130.954
JULIO 2016	31	\$71.031,79	\$2´130.954
AGOSTO 2016	25	\$71.031,79	\$1´775.795

TOTAL DIAS EN MORA	275	MONTO TOTAL ADEUDADO POR SANCION MORATORIA	\$ 19.146.248,00
--------------------	------------	--	-------------------------

NOTA: los valores parciales y totales aun NO están indexados.

PRUEBAS

Dirección: Carrera 34 No. 42- 49. – B/ Nuevo Fátima (Tuluá)
E-mail: dianamramirez17@hotmail.com / Teléfono: 318-6311166 / 317-6473150

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Solicito al señor juez se decreten y practiquen las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

De conformidad con el artículo 243 y s.s. del CGP, solicito a su señoría, tener como pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso los siguientes documentos:

- 1- Copia del Derecho de Petición reclamando una sanción moratoria, fechado y radicado 06 de septiembre de 2016; con número consecutivo 64738, de la Gobernación del Valle del Cauca.
- 2- Original de la constancia de tramite conciliatorio extrajudicial expedida el día 24 de febrero de 2017; por el Dr. Diego Felipe Vivas Tobar – Procurador 60 judicial I para asuntos administrativos del circuito de Cali.
- 3- Copia simple de la radicación generada por el Sistema de Atención al Ciudadano – SAC, de la gobernación del Valle del Cauca, que evidencia el día 19 de agosto de 2015, como la fecha en la cual se solicitó y radicó a esta entidad el reconocimiento y pago del ANTICIPO DE CESANTIAS. Radicación hecha con el No. 2015-PQR-3774.
- 4- Fiel copia del original de la Resolución No. 01597 de fecha 02 de junio de 2016, que reconoce a mi apoderado en su artículo primero del “resuelve” la suma de \$15.096.020 m/cte.
- 5- Fiel copia del original de la notificación de la Resolución No. 01597 de fecha 02 de junio de 2016, la cual realicé a nombre de mi apoderado el día 09 de junio de 2016.
- 6- Copia del certificado de salarios de mí representada, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; donde se evidencias el salario y factores salariales devengados en el año 2016, valores con los cuales se calculó el monto a sancionar a favor del Sr. JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS.
- 7- Copia de los desprendibles de pago de los dineros devengados en los meses de noviembre y diciembre de 2015; descargados desde la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Educación Departamental del Valle del cauca.
- 8- Copia del pantallazo descargado desde la página Web del FOMAG, donde se evidencia el día 26 de agosto de 2016, como la fecha en la cual la FIDUPREVISORA S.A. realizó el desembolso de los dineros reconocidos a mi poderdante.

Diana María Ramírez Frejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

- 9- Original del recibo de pago del banco BBVA, fechado 06 de septiembre de 2016, donde se evidencia el pago de los dineros desembolsados por la FIDUPREVISORA S.A. a mi representado. Valor \$15.096.020,00 M/cte.
- 10- Copia simple de la cedula de ciudadanía de mi representado.
- 11- Copia simple de mi cedula de ciudadanía.
- 12- Copia simple de mi tarjeta profesional No. 145.522 del Consejo superior de la judicatura.
- 13- Original del poder firmado y autenticado por mi representado.

DE OFICIO

Las demás pruebas que el honorable juez a su bien tenga practicar, que considere procedentes, útiles, conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, de conformidad con el artículo 213 del CPACA.

ANEXOS

Me permito acompañar con la demanda los siguientes documentos:

1. Copia de la demanda con los anexos pertinentes para el archivo del juzgado.
2. Medio magnético para el juzgado.
3. Tres (3) copias con anexos para el traslado a los demandados:
 - LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A.
 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.
4. El Ministerio Publico (1 copia sin anexos)
5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (1 copia sin anexos)

NOTIFICACIONES

- La suscrita las recibiré en la Carrera 34 N° 42 – 49. Barrio Nuevo Fátima, de la ciudad de Tuluá (Valle). También autorizo mi notificación por medios electrónicos a la cuenta: dianamramirez17@hotmail.com, de conformidad con el artículo 205 del CPACA.

***Dirección:** Carrera 34 No. 42– 49. – B/ Nuevo Fátima (Tuluá)*
***E-mail:** dianamramirez17@hotmail.com / **Teléfono:** 318-6311166 / 317-6473150*

Diana María Ramírez Trejos
Abogada especialista en Derecho Administrativo

- Mi mandante, el Sr. **JOSE RODRIGO JIMENEZ VARGAS** en la calle 12B # 28ª-256 Barrio Brisas de San Antonio de la ciudad de Tuluá (Valle).
- El **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN**, en la Calle 43 N°57-14, de la ciudad de Bogotá (Cundinamarca), Teléfono: 031-5945111 Ext 3145-3109. notificacionesjudiciales@mineducación.gov.co
- El **FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**, Oficina de prestaciones sociales, Dra. Janeth Carrillo de la Cruz. (Coordinadora de prestaciones sociales), Carrera 6 entre calles 9 y 10. Edificio palacio de San Francisco. Conmutador: (57-2) 6200000 Ext 1557-1563. Correo electrónico: despachoseceduccion@valledelcauca.gov.co
- **FIDUPREVISORA S.A.**, Dr. Jovani Orlando Bernal Ulloa, Director de prestaciones Económicas. Calle 72 No. 10-03 local 114. Teléfono: 031-5945111 Ext 3145-3109 – Bogotá.
- La **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO**, Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3. Teléfono: (57-1) 2558955. Correo electrónico: procesos@defensajuridica.gov.co
- La **PROCURADURÍA No. 60 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI**, en la Calle 11 # 5 - 54 Edificio BANCO DE COLOMBIA 3ºPISO.

Del señor Juez, atentamente,

DIANA MARIA RAMIREZ TREJOS
C.C N°66.729.570 de Tuluá (V.).
T.P. 145.522 del C.S.J.

Dirección: Carrera 34 No. 42– 49. – B/ Nuevo Fátima (Tuluá)
E-mail: dianamramirez17@hotmail.com / Teléfono: 318-6311166 / 317-6473150